



Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

## REFERENCIA

**EXPEDIENTE No.:** 11001-33-35-010-2022-00282-00  
**ACCIONANTE:** JUAN MANUEL GETIVA ARDILA  
**ACCIONADAS:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”  
**VINCULADAS:** SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S. A. – ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”  
**CLASE:** ACCIÓN DE TUTELA

1.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, concordante con el artículo 1° inciso 1° del Decreto 1382 de 2000, y el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, se **ADMITE** la ACCIÓN DE TUTELA instaurada por **JUAN MANUEL GETIVA ARDILA** con cédula de ciudadanía **19.119.665**, en contra de la entidad **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”**, en procura de la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la igualdad y no discriminación de un ciudadano que es sujeto de protección social, al trabajo y a la seguridad social.

2.- En el mismo escrito, la parte accionante formuló una solicitud de medida provisional encaminada a la suspensión de “**LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN NO 11 – 03759 DE 2022**, hasta que exista decisión en firme en el trámite tutelar”, teniendo en cuenta la edad del accionante, las personas que dependen de él y la posibilidad de vulneración a sus derechos fundamentales al mínimo vital y medios de subsistencia.

3.- La Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 312 de 2018 sintetizó tres exigencias básicas para que la adopción de medidas provisionales bien sea de oficio o a solicitud de parte, resulte procedente. Dichos presupuestos son los siguientes:

- (i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (*fumus boni iuris*).
- (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (*periculum in mora*).
- (iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.

4.- En cuanto al primer presupuesto, la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2020, lo definió “como un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho o a la protección del interés público invocado como fundamento de la pretensión principal de la demanda de amparo”. Aunque la misma Corte reconoció que en la fase inicial del proceso no es posible arribar a un nivel total de certeza sobre la violación de los derechos fundamentales en controversia, sí es necesario un estándar de veracidad apenas mínimo.



Por tal razón, la solicitud de medida provisional “debe estar soportada en las circunstancias fácticas presentes en el expediente y en apreciaciones jurídicas razonables, sustentadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

**5.-** Por su parte, en el análisis del segundo requisito (*periculum in mora*) es necesario sopesar el riesgo de que, al no adoptarse la medida cautelar, ocasione un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda que, de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. En palabras de la Corte, este requisito puede identificarse como “un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso”.

**6.-** En la providencia en comento, la Corte precisó que el análisis de los dos presupuestos o requisitos debe ser conjunto. Precisamente, el segundo requisito (*periculum in mora*) impide que el juez de tutela profiera una orden ante la simple apariencia de verdad (*fumus bonis iuris*) de la solicitud cautelar. Ello quiere decir que si no existe riesgo de que se ocasione un daño mayor al señalado en la demanda de tutela la medida debe ser denegada, aun cuando exista apariencia de buen derecho. En palabras de la Corte, “la medida provisional no es el escenario procesal para resolver el asunto de fondo, así se cuente con todos los elementos para tomar una decisión. El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 solo se activa cuando, además de la apariencia de verdad, se requiera la intervención urgente del juez. A su vez, esto supone la amenaza de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido en la sentencia final.”

**7.-** Por último, el tercer requisito incorpora el concepto de la proporcionalidad al análisis. La Corte indicó que “si bien en esta fase inicial no es dable desarrollar plenamente el juicio de proporcionalidad, sí es necesario ponderar entre los derechos que podrían verse afectados con la medida. La ponderación que esta etapa demanda funge como una última salvaguarda en favor del ciudadano. Evita que se tomen medidas que, aunque podrían estar justificadas legalmente, ocasionarían un perjuicio grave e irreparable. La proporcionalidad no supone un estándar universal y a priori de corrección, sino que exige una valoración que atienda las particularidades de cada caso concreto”.

**8.-** Una vez leído el escrito de tutela de la referencia y analizado el material probatorio aportado al expediente, el Juzgado considera que se reúnen las condiciones necesarias para acceder a la medida cautelar solicitada, sin que ello implique prejuzgamiento.

**9.-** En cuanto a la apariencia de buen derecho, el Juzgado constata que el demandante dentro de las documentales anexas a la demanda, aportó registros civiles de nacimiento y de fallecimiento de su hijo CESAR AUGUSTO GETIVA DE LA HOZ Q.E.P.D., registros civiles de nacimiento de MARY ANN GETIVA GALAT de 10 años de edad, SARAH EVE GETIVA GALAT de 13 años de edad, JOHN JOSHUA GETIVA GALAT de 15 años de edad y el registro civil de la señora CAROLINA GALAT CAMACHO que acreditan la relación con las personas a su cargo (nietos y nuera). Así mismo, allegó contrato de arrendamiento en donde figura como arrendatario su difunto hijo y como coarrendatario el accionante y su nuera.

En esa medida, sin que implique prejuzgamiento alguno, se advierte por el momento el principio de veracidad en cuanto a la afectación de los derechos fundamentales invocados al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, al trabajo y a la seguridad social, pues con los anexos de la tutela se acreditan situaciones fácticas tales como



la dependencia económica de un hogar integrado por cuatro personas, entre ellos tres menores de edad.

Atendiendo la situación fáctica desarrollada en la acción de tutela, se encuentra que se cumple a su vez con el segundo presupuesto para acceder a la medida deprecada, habida cuenta que se vislumbra la consolidación de un perjuicio o daño mayor o inminente que, de no accederse en este momento a la medida, puede generar afectaciones de índole económico y social en el hogar del cual es integrante él demandante y afectaciones de derechos tales como el de los niños y el de la vivienda.

Finalmente, el Juzgado considera que la medida no implica un daño desproporcionado al Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”. Al respecto, el Despacho constata que la medida de retiro adoptada por la entidad encuentra un fundamento jurídico válido para retirar del servicio al accionante. No obstante, también existe una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en situaciones semejantes, según la cual cuando la causal de desvinculación por alcanzar la edad de retiro forzoso no opera en forma automática, sino que debe analizarse si el salario es la única fuente de ingresos del trabajador y de ser así debe verificarse que haya sido incluido en nómina de pensionados. No actuar así implica una posible vulneración de derechos fundamentales del trabajador. Con base en ello, no es posible sostener que se genera un daño desproporcionado a una entidad quien, con su conducta, sitúa a un trabajador en una posible vulneración de derechos fundamentales.

En mérito de lo anterior, se dispone:

1. Por el medio más expedito, comuníquese la iniciación de la actuación al Representante Legal de la accionada **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”** y/o quien haga sus veces, a quien se les enviará copia de la tutela y sus anexos para que dentro del término de un (1) día contado a partir de la fecha de su recibo, se refiera sobre todos y cada uno de los hechos relacionados en el escrito de ésta.
2. Hágase la salvedad a la entidad requerida de que, de no ser el funcionario competente para el conocimiento de la acción de la referencia, se remita de manera inmediata al que ostente dicha facultad, informando tal situación al Despacho.
3. **ACCEDER** a la medida provisional solicitada en el líbello, en esa medida se ordena **DEJAR SIN EFECTOS DE MANERA TRANSITORIA** la Resolución No. 11 – 03759 de 2022, por la cual se ordena el retiro del servicio a un servidor público por edad de retiro forzoso. En su lugar se **ORDENA** el reintegro del señor **JUAN MANUEL GETIVA ARDILA** al cargo de **Instructor grado 20, IDP 2472** del Centro de Materiales y Ensayos de la Regional Distrito Capital del SENA. Dicha medida permanecerá vigente hasta tanto se dicte decisión de fondo dentro de la acción de tutela de la referencia.
4. Vincular al presente trámite a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S. A.** y a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”**, solicitándoles que en el término de un (1) día, contado a partir de la comunicación de esta decisión,



informen con destino a este proceso el estado actual de la situación pensional del accionante **JUAN MANUEL GETIVA ARDILA**.

5. **REQUERIR** al accionante, para que allegue la siguiente información:

- El Fondo de Cesantías al que se encuentra afiliado y el saldo actual de cesantías que presenta a la fecha.

6. Notifíquese mediante comunicación este auto a la parte accionante.

7. Oficiése a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, para que informe con destino a este proceso, el estado actual del expediente con número de Radicado Interno de la Corte: 78238 y C.U.I.P: 110013105019201400415-01, en donde es Recurrente: Juan Manuel Getiva Ardila y Opositor: Porvenir S.A. y Colpensiones. Magistrado ponente Dr. CARLOS ARTURO GUARIN JURADO.

8. Con el valor legal que le corresponda téngase como pruebas las documentales acompañadas con el escrito de tutela.

9. Reconocer personería adjetiva a **KATHERINE MARTINEZ ROA** con cédula de ciudadanía No. **67.002.371** y Tarjeta Profesional No. **129.961** del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en este proceso, como apoderada judicial del accionante **JUAN MANUEL GETIVA ARDILA**, en los términos y para los efectos del mandato conferido y obrante en el expediente.

Los documentos,respuestas, requerimientos o memoriales, deben ser allegados a través de correo electrónico a la dirección [jadmin10bta@notificacionesrj.gov.co](mailto:jadmin10bta@notificacionesrj.gov.co).

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**AUGUSTO LLANOS RUIZ**  
**JUEZ**

Jado

Firmado Por:  
Augusto Llanos Ruiz  
Juez Circuito  
Juzgado Administrativo  
010  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5a7b81e1a2e64b4592919cbc409c6fcc3fdd37ab0b17097b35246bbf9c976ee**

Documento generado en 04/08/2022 11:33:07 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**